

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

Martes, 1 de noviembre 2022

PARA DIFUSIÓN INMEDIATA :

Martes 1 de noviembre de 2022, Comunicado de Prensa - El Estado de Costa Rica fue notificado ayer por el Tribunal Contencioso, dando a los acusados sólo 3 días para responder a las numerosas acusaciones, incluyendo que la vacuna Covid-19 es experimental y que la falta de consentimiento informado viola el Código de Nuremberg del Derecho Internacional.

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA:

Interest Of Justice, una Organización de la Sociedad Civil Internacional establecida en Costa Rica (www.interestofjustice.org), inició solicitudes de información a las autoridades e instituciones de salud de todo el mundo y también realizó persistentemente solicitudes de información a las administraciones de salud de Costa Rica a partir de diciembre de 2020. El IOJ solicitó multitud de información sobre la ciencia y las pruebas de la pandemia del COVID-19 y las vacunas. El IOJ recibió numerosas y graves confesiones de estas solicitudes de información que ahora está siendo tomado en serio por el tribunal y emitió inmediatamente una audiencia de requerimiento judicial de 3 días debido a las pruebas aportadas y la gravedad del asunto. Toda la información recopilada por el IOJ proviene en su mayoría de los organismos gubernamentales de Costa Rica, las instituciones gubernamentales internacionales de todo el mundo y también revisado por pares de renombre la ciencia y las revistas médicas de los mejores profesionales médicos de nuestro tiempo.

El Estado de Costa Rica ha sido oficialmente notificado el 31 de octubre de 2022 y se le ha concedido una audiencia de 3 días a partir del 1 de noviembre hasta el 3 de noviembre de 2022 para responder a la acción de interés de la justicia de 14 páginas y 177 páginas de evidencia con

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

respecto a la naturaleza experimental y las terapias genéticas de edición de ADN, para las medidas cautelares antes de que se emita una orden judicial para detener todo el uso experimental de ADN covid-19 en los seres humanos sin el debido consentimiento informado.

El Estado está obligado a defender todas las acusaciones para superar la solicitud de medida cautelar, sin embargo, eso es muy poco probable teniendo en cuenta que los demandantes lograron obtener una confesión del ex ministro de salud Daniel Salas y del actual secretario de la comisión de vacunación Roberto Arroba Tijerino, quienes han declarado que las vacunas de covid-19 siguen siendo experimentales y que se importan bajo una ley que permite la importación sólo para el propósito exclusivo de la investigación humana.

El testimonio de las autoridades sanitarias de Costa Rica afirma que "los ensayos de fase III son aleatorios y a doble ciego, e implican la prueba de la vacuna experimental frente a un placebo (el placebo puede ser una solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia). Por lo general, es el paso previo a la aprobación de una vacuna" y también afirman que "[la vacuna covid-19] siempre puede denominarse "vacuna en investigación y es completamente aceptable", atestiguando además que "el producto en investigación se define como un producto de interés sanitario registrado o no registrado que se está probando o utilizando como referencia o comparador en la investigación biomédica".

El expediente judicial incluye la prueba de que el producto está todavía en fase 3 de pruebas, lo cual, como se ha dicho anteriormente, es fundamental porque las autoridades sanitarias definieron la fase 3 de pruebas utilizando la palabra experimental. Para ilustrar aún más la naturaleza experimental del producto, se proporcionó al tribunal un enlace a la FDA que establece que "la

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

investigación también puede llamarse experimental", y se mostró al tribunal que las leyes de investigación biomédica de Costa Rica citadas por las autoridades también utilizan la palabra investigación y experimental como sinónimos.

Para sellar el acuerdo, los demandantes testificaron que se enteraron de que el producto está registrado en el consejo de supervisión de la investigación biomédica de Costa Rica como autorizado para la investigación en humanos y que el producto fue inoportado bajo una ley para uso exclusivo en la investigación en humanos. No hay espacio para el debate, el producto llamado vacuna covid-19 es todavía experimental, en la fase previa a la aprobación.

Sorprendentemente los mismos 2 hombres que confesaron en enero (y todo el personal de las autoridades sanitarias de la RC) han estado testificando falsamente en la Sala Constitucional que los productos "no son experimentales". El tribunal concedió la solicitud preliminar de la organización internacional de la sociedad civil Interés por la Justicia para emitir una orden judicial basada en estas confesiones y cientos de páginas de pruebas adjuntas, incluyendo dos declaraciones juradas autenticadas del Dr. Mike Yeadon ex vicepresidente de Pfizer que testificó que las autoridades sanitarias estaban engañando al público sobre muchas cosas, incluyendo "las vacunas salvan vidas", "las máscaras funcionan para detener el virus COVID-19" y el Dr. Yeadon también testificó "la prueba de PCR dio 97-100% de falsos positivos según lo calibrado en Costa Rica en 45ct", que se están contando para crear una pandemia fraudulenta basada en estadísticas falsas en primer lugar.

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

Después de la audiencia el Juez tiene el deber legal de tomar las confesiones y la ley como verdaderas y conceder el requerimiento para detener la ilegalidad de las inyecciones de COVID-19 en Costa Rica y retirarlas del calendario de vacunas.

Principales motivos de prevención mencionados en la solicitud de medidas cautelares:

- El CONIS es el organismo costarricense creado en 2015 para supervisar la investigación y la ética. El IOJ se enteró de que el CONIS ha registrado las vacunas de covid-19 como "investigación biomédica", pero nunca informó a la gente de que se trata de una investigación con fines exclusivamente humanos. El caso alega que el CONIS está mal equipado y es negligente en la gestión de la ética, lo que está causando violaciones sistemáticas del derecho no derogable a estar libre de experimentación en Costa Rica, según el artículo 69b de los Principios de Siracusa.

- Las autoridades sanitarias están engañando a los tribunales, a los medios de comunicación y al público en general en el sentido de que el producto llamado "vacunas 14covid-19" no son experimentales. Sin embargo, en enero de 2022 el IOJ escribió una carta legal que dio lugar a que las autoridades sanitarias CONFESARAN por escrito y bajo juramento que el producto es efectivamente "experimental". El testimonio escrito de las autoridades sanitarias del 24 de enero afirma que las vacunas covid-19 son importadas bajo las leyes de investigación biomédica .

- La solicitud de requerimiento explica al tribunal que no está en discusión que el producto es "de investigación". Las pruebas adjuntas muestran que la FDA dice: "Un medicamento en investigación también puede llamarse medicamento experimental y se está estudiando para ver si

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

su enfermedad o condición médica mejora al tomarlo. Los científicos están tratando de probar en los ensayos clínicos:

- Si el fármaco es seguro y eficaz.
 - Cómo puede utilizarse el fármaco en esa enfermedad.
 - Qué cantidad de fármaco se necesita.
 - Información sobre los posibles beneficios y riesgos de tomar el fármaco.
- El tribunal recibió la prueba de que el producto llamado vacuna covid-19 está clasificado por la FDA como una terapia génica que, según la guía de enero de 2020 de la FDA: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for Industry" (Seguimiento a largo plazo tras la administración de productos de terapia génica en humanos), establece que el uso de estos productos experimentales afecta al ADN con un riesgo poco razonable para su uso en más de unas pocas personas a la vez". Las pruebas adjuntas de Suecia muestran que la vacuna de Pfizer se integra en el ADN humano en menos de 6 horas, por lo tanto, el interés de la justicia argumenta que este producto de terapia génica tiene riesgos inherentes previsibles para el genoma humano que no se encuentran en las "vacunas tal y como se definen en la ley reguladora de la vacunación 32722 1 (p)", lo que significa que la intención legislativa de que una "vacuna confiera inmunidad" y "sea segura" está siendo usurpada por las autoridades sanitarias de la RC al calificar erróneamente la terapia génica como una vacuna.
- El producto llamado vacuna covid-19 no es una vacuna como se define en la ley reguladora de la vacunación de la RC 32722 1 (p). El testimonio del Ministro de Salud muestra que las "nuevas vacunas" están siendo definidas "más ampliamente" por el monopolio privado extranjero de la

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

OMS y el CDC, a pesar de que la OMS y el CDC no están autorizados a redefinir la política de salud o las definiciones legales para los estados miembros. La importación y el uso de las no vacunas exceden la jurisdicción estatutaria bajo la ley de RC porque la comisión de vacunación sólo tiene autoridad para importar "vacunas", y este exceso de autoridad estatutaria también implica a la OMS por violar el derecho del RSI 3 (4) de los estados miembros a la legislación soberana sobre la política sanitaria.

- La definición extranjera de facto de vacuna adoptada por la OMS y los CDC actualmente es imprudentemente peligrosa y viola la intención legislativa porque simplemente "inducir respuestas de anticuerpos" no equivale a inmunidad y conlleva un riesgo previsible de "reacciones similares a las autoinmunes a los antígenos propios" (aumento de la enfermedad), exacerbando la transmisión y la enfermedad, lo que la orientación de la FDA sobre la terapia génica advierte claramente.

- Los demandantes alegaron que el interés de la justicia tiene intereses en el asunto, explicando que son partes interesadas en el proceso de aprobación de los productos COVID-19 bivalentes de la FDA/CBERPAC/VBERPAC y que se trata de las mismas vacunas pediátricas que Costa Rica ha autorizado e importado para su uso en humanos. "Algunas de las informaciones entre la FDA y los demandantes son sobre la falta de una prueba de interés público imperiosa, también la necesidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Hay pruebas en el expediente de más riesgo que a la relación de beneficio que también se establece como hecho en el expediente y no en disputa. Véase la prueba documental # 3 Comentario del interés de la justicia e información de las partes interesadas a la FDA como partes interesadas relevantes y Docket #- para la petición ciudadana de la FDA de revocar la EUA para las vacunas genéticas bivalentes y todas las de

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

ARNm". ¡Exigimos tiempo para el debido proceso con la FDA porque Costa Rica dice que confía en la FDA en este asunto!

Lo que la OIJ pide al tribunal ordinario:

Los demandantes "exigen una moratoria indefinida sobre el registro y uso de todos los productos de investigación biomédica que la FDA considera "terapias génicas y celulares", incluyendo pero no limitándose al producto llamado "Vacuna COVID-19".

Respetuosamente,

Dustin Bryce

Interés de la Justicia

Comité de Supervisión Legal y Cívica

Dirección de correo electrónico- contact@interestofjustice.org

www.interestofjustice.org

www.theoversightcommittee.org

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

Version en Ingles

Martes, 1 de noviembre 2022

FOR IMMEDIATE RELEASE ,

Tuesday November 1, 2022, Press Release - State of Costa Rica Served Yesterday by Contentious Court, Given defendants Only 3 Days To Respond To Numerous Allegations, Including That The Covid-19 Vaccine Is Experimental and Failure To Informed consent Violates Nuremberg Code of International Law.

FOR IMMEDIATE RELEASE:

Interest Of Justice, an International Civil Society Organization established in Costa Rica (www.interestofjustice.org), initiated information requests to the health authorities and institutions around the world and also persistently made requests for information to Costa Rica health administrations starting in December of 2020. IOJ requested a multitude of information regarding the science and evidence of the COVID-19 pandemic and vaccinations. IOJ received numerous and serious confessions from these information requests which is now being taken seriously by the court and immediately issued a 3 day Injunction hearing due to the evidence brought to light and the seriousness of the matter . All information gathered by IOJ mostly originates from the governmental bodies of Costa Rica, International Governmental institutions around the world and also peer reviewed renowned publicized science and medical journals from the top medical professionals of our time.

The State of Costa Rica has officially been served Oct 31, 2022 and granted a 3 day hearing starting on November 1st through November 3rd, 2022 to answer Interest of Justice's 14 page action and 177 pages of evidence regarding the experimental nature and DNA editing gene therapies, for precautionary

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

measures before an injunction is issued to stop all covid-19 DNA experimental use in humans without proper informed consent.

The state is required to defend all accusations to overcome the request for injunction, however, that is very unlikely considering the plaintiffs managed to get a confession out of the ex health minister Daniel Salas and current vaccination commission secretary Roberto Arroba Tijerino who have stated that the covid-19 vaccines are still experimental and imported under a law that allows the import only for the exclusive purpose of human research.

Testimony of the Costa Rica Health Authorities states, "Phase III trials are randomized and double-blind, and involve the experimental vaccine being tested against a placebo (the placebo can be a saline solution, a vaccine for another disease, or some other substance). It is generally the step prior to approval of a vaccine." and also state that "[the covid-19 vaccine] can always be referred to as "investigational vaccines and it is completely acceptable", further testifying that "investigational product is defined as a registered or unregistered product of health interest that is being tested or used as a reference or comparator in biomedical research."

The court filing includes proof the product is still in phase 3 trials which as stated above which is critical because the the Health Authorities defined phase 3 trials by using the word experimental. To further illustrate the experimental nature of the product a link to FDA was provided to the court which states **"investigational can also be called experimental"**, and the court was shown the Costa Rica biomedical research laws quoted by the authorities also use the word investigational and experimental synonymously.

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

To seal the deal, the Plaintiffs testified they learned the product is registered in Costa Rica’s biomedical research oversight board CONIS as being authorized for human research and the product was inported under a law for exclusive use in human research. There is no room for debate, the product called covid-19 vaccine is still experimental, in the phase prior to approval.

Shockingly the same 2 men that confessed in January (and all staff of the CR Health Authorities) have been falsely testifying in the Constitutional Chamber that the products are “not experimental”. The court GRANTED the civil society international organization Interest of Justice’s preliminary request to issue an injunction based on these confessions and hundreds of pages of evidence attached, including two authenticated affidavits from Dr. Mike Yeadon former VP of Pfizer who testified the health authorities were misleading the public about many things including “vaccines save lives”, “masks function for stopping COVID-19 virus” and Dr. Yeadon also testified “the PCR test gave 97-100% false positives as calibrated in Costa Rica at 45ct”, which are being counted to create a fraudulent pandemic based on false statistics in the first place.

After the hearing the Judge has a legal duty to take the confessions and law as true and grant the injunction to stop the illegal nature of the COVID-19 shots in Costa Rica and remove them from the vaccine schedule.

Key grounds for prevention named in the request for precautionary measures:

- CONIS is the Costa Rican body created in 2015 to oversee research and ethics. IOJ learned the CONIS has registered covid-19 vaccines as “biomedical research” but never informed people its investigational for the exclusive purpose of human research. The case alleges the CONIS is ill equipped

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

and negligent to manage ethics which is causing systematic violations of non derogable right to be free of experimentation in Costa Rica under Siracusa Principles Article 69b.

- The health authorities are misleading the courts, media and public in which the product called “14covid-19 vaccines” are not experimental. However, back in January 2022 IOJ wrote a legal letter that resulted in the health authorities CONFESSIOIN in writing under oath that the product is indeed “investigational”. The written testimony of the health authorities from January 24 states the covid-19 vaccines are imported under biomedical research laws .

- The request for injunction explains to the court that it’s not in dispute the product is “investigational”. **The evidence attached shows FDA says:** *“An investigational drug can also be called an experimental drug and is being studied to see if your disease or medical condition improves while taking it. Scientists are trying to prove in clinical trials:*

- *If the drug is safe and effective.*
- *How the drug might be used in that disease.*
- *How much of the drug is needed.*
- *Information about the potential benefits and risks of taking the drug*

- The court was given proof the product called covid-19 vaccine is classified by FDA as a gene therapy which according to FDA January 2020 guidance: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for Industry," states the use of these experimental products affects DNA with an unreasonable risk to use in more than a few people at a time”. Attached evidence from Sweden shows the Pfizer vaccine integrates into human DNA in less than 6 hours, therefore, Interest of Justice argues this gene therapy product has inherent foreseeable risks to the human genome

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

not found in ‘*vaccines as defined in vaccination regulatory law 32722 1 (p)*’, which means Legislative intent that a “vaccine confers immunity” and “is safe” is being usurped by the CR health authorities erroneous misbranding of gene therapy as a vaccine.

- The product called covid-19 vaccine is not a vaccine as defined in CR vaccination regulatory law 32722 1 (p). Testimony of the Health Minister shows the “newer vaccines” are being defined “more broadly” by the foreign private monopoly the WHO and CDC, despite the fact the WHO and CDC are not authorized to re-define health policy or legal definitions for member states. The importation and use of the non vaccines exceed statutory jurisdiction under CR law because the vaccination commission only has authority to import “vaccines”, and this excess of statutory authority also implicates the WHO for violating IHR 3 (4) right of member states to sovereign legislation over health policy.

- The WHO and CDC foreign de facto definition of vaccine currently adopted by Costa Rica is recklessly dangerous and violates Legislative intent because merely “inducing antibody responses” does not equate to immunity and carries a foreseeable risk of “auto immune like reactions to self antigens” (enhanced disease), exacerbating the transmission and illness, which FDA guidance on gene therapy clearly warns of.

- Plaintiffs alleged Interest of Justice has interests in the matter, explaining they are Stakeholders in the FDA/CBERPAC/VBERPAC, Bivalent COVID-19 products approval process and are in regards to the same pediatric vaccines in which Costa Rica has authorized and imported for the use in humans. *“Some of the information between FDA and plaintiffs are about the lack of a compelling public interest test, also necessity, legality, reasonableness and proportionality. **There is evidence in the record of more risk than to benefit ratio which is also settled as fact in the record and not in dispute.** See*

CIVICS AND LAW
MONITORING COMMITTEE

Documentary evidence # 3 Interest of Justice Comment and Stakeholder info to FDA as relevant stakeholders and Docket #— for FDA Citizen Petition to revoke EUA for bivalent and all mRNA gene vaccines.” We demand time for due process with FDA because Costa Rica says they rely on FDA on this matter!

What IOJ is asking the Ordinary court to do:

Plaintiffs *"demand a moratorium placed indefinitely on the registration and use of all of the investigational biomedical research products that FDA considers a “gene and cell therapies” including but not limited to the product called “COVID-19 Vaccine”.*

Respectfully,

Dustin Bryce

Interest of Justice

Law and Civics Oversight Committee

E-Mailing address- contact@interestofjustice.org

www.interestofjustice.org

www.theoversightcommittee.org



EXPEDIENTE: 22-001917-1028-CA - 2
PROCESO: MEDIDA CAUTELAR
ACTOR/A: Interest Of Justice ICSO IOJ
DEMANDADO/A: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a las dieciséis horas veinticuatro minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintidós.-

Visto el memorial de fecha treinta y uno de octubre del año en curso, Se tiene por cumplida la prevención, por lo que, de la solicitud de medida cautelar que promueve **INTEREST OF JUSTICE ICSO IOJ**, se confiere audiencia por el plazo de **TRES DÍAS HÁBILES**, a las partes demandada **CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL** y al **ESTADO**, para que conteste por escrito (artículo 24.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Se le advierte a la parte demandada que en el primer escrito que presente debe señalar un medio para atender notificaciones, bajo el apercibimiento de que mientras no lo haga, las resoluciones posteriores quedarán notificadas con el transcurso de veinticuatro horas de dictadas, incluidas las sentencias. Se producirá igual consecuencia cuando la notificación no se pueda efectuar en el medio señalado.- Artículos 11, 34, 36 y 50 de la Ley de Notificaciones Judiciales N°8687 del 28 de octubre del 2008, publicada en La Gaceta N°20, del 29 de enero de 2009 . **Licenciado José Ariel Solano Solano. Juez** MRIVERAVA



XPZ9XTCIYC461

JOSE ARIEL SOLANO SOLANO - JUEZ/A DECISOR/A

Litigios administrativos

Tribunal Contencioso Administrativo

TIPO DE PROCESO: SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR ANTE CAUSAN

Número de expediente:

Actor: *Interés de la Justicia* [REDACTED], [REDACTED]

Demandada: *CCSS, Secretario de la CNVE Roberto Tijerino, Ministerio de Salud*

Estimado Amigo Juez:

El abajo firmante, Interés de la Justicia o "IOJ" es un Instituto Privado, Organización de la Sociedad Civil con Domicilio Internacional Establecido en noviembre de 2016, un grupo con intereses difusos con sede en la zona sur de San José, Costa Rica, Vecino del [REDACTED] las funciones clave de IOJ son ayudar a la Comunidad Global de Ciudadanos a asegurar la responsabilidad del gobierno ante el pueblo. La misión de la OIJ es salvaguardar el interés de la comunidad internacional en su conjunto y hacer efectiva la letra y la intención del derecho internacional supremo, sus normas imperativas y sus costumbres. ,


[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
identificación número [REDACTED],

La suscrita [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Defensora de los *Derechos Humanos* [REDACTED] pasaporte de identificación número [REDACTED] de conformidad con los artículos 1, 2, 19 a 30, 60, 128 y concordantes del Código Procesal Contencioso Administrativo, con el debido respeto los Demandantes solicitan que se dicte MEDIDA PRECAUCIONAL COMO ACCIÓN PREVIA, para garantizar el efectivo resultado de un proceso contencioso pleno y de tramitación preferente que se interpondrá en su momento., para que se declare la nulidad absoluta de las conductas administrativas objeto del proceso y de las actuaciones materiales de la Administración Pública y de las conductas omisivas de la Administración Pública consistentes en que un funcionario público haya actuado con dolo o negligencia grave en el desempeño de sus funciones. Dichos actos constituyen una ilegalidad manifiesta, *ya que* la Administración se ha apartado de los dictámenes periciales en los que ahora se demuestra la ilegalidad. medida implica una conducta administrativa activa u omisiones con elementos discrecionales, o vicios en el ejercicio de su discrecionalidad. La desviación de poder será motivo de impugnación. La ley protegerá, al menos, los derechos personales y los intereses legítimos de los administrados que también fue publicada por la administración en relación con las vacunas pediátricas COVID-19 para poblaciones de seis meses a cinco años, DM-RM- 6934-2022.-

MINISTERIO DE SANIDAD. San José a las diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós y también Documento N ° GM-11395-2022, 27 de septiembre de 2022 de la CCSS

HECHOS:

Primero: Demandados, El Ministerio de Salud, la CCSS y la CNE, la CNVE autorizó a Costa Rica como el primer país latinoamericano en contar con las vacunas pediátricas COVID-19 para poblaciones de seis meses a cinco años, DM-RM- 6934-2022.- MINISTERIO DE SALUD. San José a las diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil veintidós y también Documento N ° GM-11395-2022, del 27 de septiembre de 2022 de la CCSS y publicado en el diario nacional. Se reitera que la Constitución Política y la Convención sobre los Derechos del Niño imponen al Estado costarricense la obligación de garantizar la protección del interés superior del niño, como derecho humano fundamental. En consecuencia, para proteger el derecho a la vida y a la salud que asiste a los menores de edad, y para proteger los derechos de los niños la vacunación pediátrica contra el COVID-19 con los **productos de** investigación de la terapia génica **debe ser impedida inmediatamente**. La CCSS es incorrecta en su afirmación de: *GM-11395-2022, 27 de septiembre de 2022 que, "Además de constituir una obligación legal, el personal de salud de la Caja la Seguridad Social de Costa Rica está facultado para inocular a los menores de edad y no se requiere el consentimiento informado de los padres para ello, de acuerdo con el artículo 43 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que estipula lo siguiente: "Artículo 43.- Vacunación. Los menores de edad deberán ser vacunados contra las enfermedades que determinen las autoridades sanitarias. El suministro y la aplicación de las vacunas serán obligaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Por razones médicas, las excepciones para aplicar las vacunas serán autorizadas únicamente por el personal de salud correspondiente. El padre, la madre, los representantes legales o el encargado serán responsables de que la vacunación obligatoria de los menores a su cargo se realice oportunamente."* Dichos fundamentos de la vacunación obligatoria han sido avalados y reiterados por la Sala Constitucional en múltiples ocasiones, dentro de procesos judiciales en los que la Institución ha comparecido como parte; ver Sentencia No. 2019015643, dictada a las nueve treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, del expediente 19-010676-0007-CO, en la que se recurrió a la Caja Costarricense del Seguro Social, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación Pública y al Patronato Nacional de la Infancia, en un recurso de amparo mediante el cual se objetó la inoculación obligatoria de los menores, así como el consentimiento informado de los padres o tutores; argumentos que no fueron compartidos por el Tribunal Constitucional, que declaró inadmisibile el recurso y resolvió, en lo que interesa, lo siguiente "(...) esta Sala no considera que tengan razón los consultantes, al decir que el establecimiento de la obligatoriedad de las vacunas es lesivo del derecho a la autonomía de la voluntad. La salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de toda duda. **Es uno de los derechos del hombre que emana de su dignidad como ser humano. De este derecho surge**

tanto para el individuo como para la comunidad organizada, así como para el propio Estado, una responsabilidad en materia de salud. Los instrumentos internacionales y las declaraciones constitucionales de derechos sociales incluyen el derecho a la salud, a cuyo reconocimiento se suma la imposición del deber de cuidar la salud propia y la de los demás." Los peticionarios argumentan que la sentencia es correcta cuando en lo que respecta a las vacunas como se define en el 32722 (p) sin embargo, el producto covid-19 vacuna se define por la FDA como una terapia génica o celular que sigue siendo productos de investigación y no hay ninguna MOTIVACIÓN para CCSS, CNVE o Sala 4 para comparar las vacunas a las inyecciones de terapia génica COVID-19 de investigación porque el mecanismo científico de acción es muy diferente con 2 perfiles de seguridad diferentes, la terapia génica es extremadamente nueva y no probada y es reconocidamente de investigación, que la ley internacional superior Principios de Siracusa Artículo 69 b PROHIBE al Estado administrar en este momento sin el consentimiento informado porque hacerlo es violar derechos no derogables que la ley no permite a Sala 4 derogar. Cuando se trata de este tema de derecho internacional y violación de derechos humanos el derecho nacional es inferior y NO SE APLICA. **Lo que sí aplica el derecho superior es la Declaración de Helsinki, la Declaración Universal de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, los Principios de Siracusa Artículo 69 (b) y el Código de Nuremberg Artículo 1, 3 y 5 porque estos son productos de investigación por naturaleza, se sabe que causan la muerte como un efecto común que no está en la hoja de datos, y estos productos de investigación aún no son vacunas aprobadas según el testimonio bajo juramento de la CCSS y el Ministerio de Salud en el expediente de los peticionarios.** Son productos de investigación y se REQUIERE el consentimiento informado. La Sala 4 no está facultada para ignorar los hechos o la ley y los hechos son claros su investigación y la ley es clara los productos de investigación no pueden ser obligatorios o administrados voluntariamente en ausencia de un verdadero consentimiento informado de los riesgos significativos conocidos de la muerte, el ADN afectado, efectos adversos retardados a largo plazo, tales como el cáncer y auto inmunes como trastornos. Las vacunas no son lo mismo que este tipo de terapias genéticas que siguen siendo "de investigación" y no están registradas según las confesiones del secretario de la CCSS en nuestro registro. En derecho lo similar nunca es lo mismo. Principios de Siracusa Artículo 69 (b): Ningún Estado, incluidos los que no son parte del Pacto, puede suspender o violar, ni siquiera en situaciones de emergencia pública: (b) el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y a **no ser sometido a experimentos médicos o científicos**; el derecho internacional consuetudinario prohíbe en toda circunstancia la denegación de esos derechos fundamentales. La Sala 4 tiene el deber de tomar la confesión del secretario de la CNVE y del Ministro de Salud del 24 de enero de 2022 de que los productos son experimentales por su valor nominal, pues como señala la Sala, el **testimonio del ejecutivo debe tomarse bajo juramento como verdadero.** Ver confesión el producto es exclusivamente importado para la investigación humana y de investigación, todavía en 3^a fase que es la fase experimental antes de la seguridad y la aprobación 

Segundo: El gobierno de Costa Rica y las autoridades de salud se basan en datos sanitarios, guías, leyes y regulaciones sobre las vacunas pediátricas de la FDA (Food and Drug Administration en los Estados Unidos de América) y otros organismos fuera de Costa Rica que autorizan y o distribuyen medicamentos farmacéuticos biológicos como las terapias genéticas de COVID-19 - tecnología de ARNm y vacunas. Ver prueba documental #2 *"Las vacunas utilizadas por el país contra el covid-19 están autorizadas por la OMS y, además, cuentan con la aprobación para ser utilizadas por las Agencias Reguladoras Estrictas, como la FDA y la EMA."*

Tercero: Las autoridades sanitarias costarricenses testificaron en el expediente de los Peticionarios que se basan en los datos sanitarios, las orientaciones, las leyes y los reglamentos sobre las vacunas pediátricas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América), del Reino Unido y de otros organismos fuera de Costa Rica que autorizan o distribuyen medicamentos biológicos como terapias genéticas, tecnología de ARNm y vacunas. Los demandantes recibieron el testimonio de los demandados el 24 de enero de 2022 expresando que los productos son importados bajo las leyes de investigación biomédica ver pruebas documentales. Las pruebas en las que se basan los demandantes son también las de los hechos y los datos en los que se basan los demandados de la FDA que ya están establecidos en el registro público. No hay ninguna disputa en este momento. Ver prueba documental #2 *"Las vacunas utilizadas por el país contra el covid-19 están autorizadas por la OMS y, además, tienen la aprobación para ser utilizadas por las Agencias Reguladoras Estrictas, como la FDA y la EMA"*

Cuarto: La relación legal de los demandantes con las autoridades de salud de Costa Rica y la FDA son todos del mismo tema en relación con los derechos humanos de los niños y también de los adultos, pero en este caso, la urgencia es de los niños. Los demandantes han escrito a todos los funcionarios gubernamentales posibles desde diciembre de 2020 en Costa Rica con respecto a las legalidades y también a los peligros de las vacunas pediátricas y están atascados en procesos administrativos con las autoridades de salud que son ineficientes y lentos como una mula. La administración no responde a las preguntas directas. Los demandantes cuentan con el testimonio de la Sala Constitucional sobre la administración anterior que declaró "sólo nos responderá de manera general a propósito". Las presunciones que constan en el expediente administrativo han sido asentadas como hecho y defecto por aquiescencia en que los actos impugnados son absolutamente nulos y temerarios.

Quinto: Los demandantes tienen asuntos pendientes ante múltiples administraciones entre las que se encuentra el Ministerio de Sanidad que sigue pendiente de respuesta por parte de las autoridades competentes como la CNVE, en relación con las denuncias de los demandantes. Los procesos son extremadamente lentos e inactivos y poco eficientes en una urgencia como ésta, por lo que existe un peligro en la demora.

Sexto: Los demandantes tienen intereses en el asunto y son partes interesadas en el proceso de aprobación de los productos bivalentes COVID-19 de la FDA/CBERPAC/VBERPAC y se refieren

a las mismas vacunas pediátricas que Costa Rica ha autorizado e importado para su uso en humanos. Algunas de las informaciones entre la FDA y los demandantes son sobre la falta de una prueba de interés público imperiosa, también la necesidad, legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Hay pruebas en el expediente de más riesgo que a la relación de beneficio que también se establece como hecho en el expediente y no en disputa. Véase la prueba documental n° 3 Comentario del interés de la justicia e información de las partes interesadas a la FDA como partes interesadas relevantes

Séptimo: De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, Código de Regulaciones Federales CFR 10.30, los demandantes han abierto un caso con el Comisionado de Alimentos y Medicamentos para revocar la autorización de la FDA para Moderna, Pfizer- BioNTech vacunas bivalentes COVID-19 para su uso como una dosis de refuerzo, y revocar todas las demás autorizaciones para las Terapias Génicas de ARNm mal etiquetadas como vacunas que no confieren inmunidad porque la orientación de la FDA de enero de 2020: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for Industry" (Seguimiento a largo plazo después de la administración de productos de terapia génica humana), afirma que el uso de estos productos experimentales afecta al ADN con un riesgo poco razonable para su uso en más de unas pocas personas a la vez", que es el expediente # FDA-2022-P-2411. Los demandantes necesitan el debido proceso, teniendo en cuenta que las Autoridades Sanitarias de Costa Rica se basan en los datos de la FDA. Estos datos pueden cambiar en cualquier momento después de que se resuelvan estos debates. La FDA dice que se basan en la totalidad de las pruebas para autorizar estos productos que alteran los genes, excepto que no tomaron en consideración las pruebas de los Demandantes y todavía están en debate. De ahí la necesidad del debido proceso. Ver prueba documental #4

Octavo: La FDA considera que el ARNm es una terapia génica, lo que los Peticionarios les dio un amplio conocimiento de su propia base de datos y la FDA dice que crea un riesgo irrazonable en más de unas pocas personas. El 13 de marzo de 2019, Moderna presentó su Informe Anual del [Formulario 10-K](#) a la Securities & Exchange Commission (SEC) (Comisión de Seguridad e Intercambio) en el que afirmaban en [la página 150](#) que "*Actualmente, el ARNm es considerado un producto de terapia génica por la FDA*". [1, 2] En esa misma presentación afirman que "*debido a que no se ha aprobado ningún producto en el que el ARNm sea el ingrediente activo principal, la vía regulatoria para su aprobación es incierta. El número y el diseño de los estudios clínicos y preclínicos necesarios para la aprobación de este tipo de medicamentos no se han establecido...*" Avancemos rápidamente hasta principios de 2020 y, de repente, este producto de ARNm ya no es un "tipo de medicamento" o fármaco, sino que se **denomina "vacuna"**, lo que significa que puede entrar en la vía reglamentaria establecida de un "[biológico](#)". Según [la FDA](#), las vacunas están destinadas a "*prevenir enfermedades infecciosas*". El **Centro de Evaluación e Investigación Biológica** (CBER) de la FDA regula los productos vacunales, un departamento distinto al de los medicamentos, con su propio proceso de evaluación y autorización ([BLA](#)). Moderna pasa de ser una empresa que ha "incurrido en [pérdidas significativas](#) desde nuestros inicios", al no haber sacado nunca un producto al mercado, a obtener [12.000 millones de dólares de beneficios](#) en 2021

gracias a un producto de ARNm que llamaron "vacuna". *"Probablemente habríamos tenido una tasa de rechazo del 95%" para estas inyecciones hace dos años, pero la pandemia y la comercialización de las inyecciones como "vacunas" las ha hecho populares entre el público,* dijo Stefan Oelrich, presidente de la División Farmacéutica de Bayer, habla en la Cumbre de Salud Global 2021. **Ver prueba documental # 5**

Noveno: La reactivación de la investigación humana en Costa Rica entre 2010 y 2014, el Gobierno de Costa Rica tuvo una larga batalla para garantizar la experimentación en seres humanos y la investigación biomédica se mantuvo con una moratoria. Es fundamental tener en cuenta que la FDA dice que su pensamiento actual en los "productos de terapia génica" es que en efecto afectan el genoma humano por lo tanto bajo la ley de salud de Costa Rica, están regulados bajo el artículo. 5 y 10 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, que la Corte Constitucional dice que es *"el patrimonio de la humanidad"* Los demandantes creen que debe ser retenido en su lugar debido a la naturaleza experimental genética de los productos que se cuestiona. Porque el Estado está omitiendo lo que se requiere para el consentimiento informado y no proporciona la información adecuada y veraz de que el producto afecta al genoma humano causando una secuela de efectos adversos significativos retardados. Ver prueba documental *"Costa Rica es una pequeña nación en desarrollo de América Central con un sistema de salud universal bien considerado y una fuerte tradición de derechos humanos. En la última parte del siglo XX, se convirtió en un lugar popular para los ensayos clínicos financiados por las empresas farmacéuticas multinacionales. Ante la preocupación por la ineficacia de la supervisión y los presuntos abusos en la investigación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aprobó una moratoria sobre todos los estudios biomédicos con seres humanos. Esta moratoria estuvo en vigor entre 2010 y 2014, cuando la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley nacional para proteger los derechos y el bienestar de los participantes. Este estudio de caso revisa la historia de la protección de la investigación en seres humanos en Costa Rica y ofrece recomendaciones sobre cómo Costa Rica puede avanzar responsablemente como líder en investigación en seres humanos para la región. PALABRAS CLAVE investigación en seres humanos, Costa Rica, moratoria de la investigación, ética de la investigación en seres humanos, investigación biomédica Householder, M., et al., "Reviving Human Research in Costa Rica", Ethics & Human Research 41, no. 1 (2019): 32-40. DOI: 10.1002/eahr.500004"* **Ver Prueba documental #6**

Décimo: Que según la Constitución Política en sus artículos 21 y 50, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, así como el bienestar de la población, los cuales se convierten en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su protección. Derivado de este deber de protección, existe la necesidad de adoptar y generar medidas inmediatas de salvaguarda cuando dichos bienes jurídicos se encuentren amenazados o en peligro, siguiendo el mandato constitucional estipulado en el numeral 140 incisos 6) y 8) del Texto Fundamental.

Que es función esencial del Estado velar por la salud de la población, correspondiendo al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, la definición de la política nacional de salud, la capacitación, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relacionadas con la salud , así como la ejecución de aquellas actividades que le correspondan de acuerdo a la ley, debido a las funciones encomendadas al Ministerio de Salud, se debe realizar la vigilancia de la salud pública y evaluar la situación sanitaria de la población cuando se encuentre en riesgo

Que de acuerdo a los artículos 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341 de la Ley General de Salud, Ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973 y ordinales 2 inciso b) y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley NO 5412 del 08 de noviembre de 1973, las normas sanitarias son de orden público y se exceptúan los tratados como ley de mayor jerarquía. Ante esto, el Ministerio de Salud como autoridad competente podrá ordenar y tomar medidas especiales para evitar riesgos o daños a la salud de las personas, o que estos se propaguen o agraven, así como para inhibir la continuación o recurrencia de la violación de los individuos siempre y **cuando se cumpla con las leyes superiores que rigen estos productos de terapia génica de investigación biomédica llamados vacunas covid-19**

Undécimo: Interés de la Justicia, una Organización internacional y los Peticionarios, que son un grupo con intereses difusos, lesionados por esta situación legal, invocan el deber y la responsabilidad de los Tribunales bajo la ley superior de Responsabilidad de los Estados por Hechos Internacionalmente Ilícitos de 2001 para prevenir la violación de los derechos no derogables de las personas a rechazar un experimento en el artículo 69(b) de los Principios de Siracusa. En particular, los peticionarios desean señalar la existencia de una violación de una obligación internacional de NO violar los derechos no derogables a rechazar la experimentación sin consentimiento informado. Debido a que el Estado es responsable en virtud de las normas internacionales perentorias, el Estado tiene el deber de cesar, compensar, satisfacer y el deber de garantías razonables de no repetición. Recordamos al tribunal sus deberes y responsabilidades según el derecho internacional en el que se reiteran en la siguiente ley Responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos 2001. Véanse los siguientes artículos aplicables en los que se invoca:

Artículo 12

Existencia de violación de una obligación internacional. Hay violación de una obligación internacional por parte de un Estado cuando un hecho de ese Estado no está en conformidad con lo que exige esa obligación, independientemente de su origen o carácter.

Artículo 26 Cumplimiento de normas imperativas

Nada de lo dispuesto en el presente capítulo excluye la ilicitud de cualquier acto de un Estado

que no esté en conformidad con una obligación derivada de una norma imperativa de derecho internacional general.

Artículo 30 Cesación y no repetición

El Estado responsable del hecho internacionalmente ilícito tiene la obligación:

- a) de cesar este hecho, si continúa;
- b) de ofrecer seguridades y garantías adecuadas de no repetición, si las circunstancias lo exigen.

Artículo 31 Reparación

El Estado responsable tiene la obligación de reparar íntegramente el perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito.

2. El perjuicio comprende todo daño, material o moral, causado por el hecho internacionalmente ilícito de un Estado.

Artículo 32 Irrelevancia del derecho interno

El Estado responsable no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de sus obligaciones en virtud de esta parte.

REPARACIÓN DEL PERJUICIO

Artículo 34 Formas de reparación

La reparación integral del perjuicio causado por el hecho internacionalmente ilícito adoptará la forma de restitución, indemnización y satisfacción, por separado o conjuntamente, de conformidad con las disposiciones del presente capítulo.

Artículo 35 Restitución

El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a la restitución, es decir, a restablecer la situación que existía antes de la comisión del hecho ilícito, siempre y cuando y en la medida en que la restitución:

a) no sea materialmente imposible;

(b) no implique una carga desproporcionada en relación con el beneficio derivado de la restitución en lugar de la indemnización.

Artículo 36 Indemnización

El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a indemnizar el daño causado por éste, en la medida en que dicho daño no sea reparado mediante la restitución.

2. La indemnización abarcará todo daño evaluable económicamente, incluido el lucro cesante, en la medida en que esté comprobado.

Artículo 37 Satisfacción

El Estado responsable de un hecho internacionalmente ilícito está obligado a dar satisfacción por el perjuicio causado por ese hecho en la medida en que no pueda ser reparado mediante restitución o indemnización.

2. La satisfacción puede consistir en un reconocimiento de la violación, una expresión de pesar, una disculpa formal u otra modalidad apropiada.

3. La satisfacción no será desproporcionada con respecto al perjuicio y no podrá adoptar una forma humillante para el Estado responsable.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES:

La solicitud de medidas cautelares se basa en los artículos 41 y 49 de la Constitución Política, y en los artículos 19, 20, 21, 22, 24, 25 del Código Contencioso Administrativo.

El derecho fundamental a la justicia cautelar ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional costarricense. Se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Política, según consta en la sentencia No. 2005-6224, a las quince horas y dieciséis minutos, del 25 de mayo de dos mil cinco, mediante la cual la Sala Constitucional dispuso:

"No puede haber una tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el órgano jurisdiccional no puede ejercer un poder cautelar ágil y expedito (") es necesario señalar que el constituyente derivado, al reformar el artículo 49 de la Constitución Política, mediante la Ley No. 3124, de 25 de junio de mil novecientos sesenta y tres, concibió un control de la legalidad de la función administrativa universal y plenaria sin focos de control externo, por lo que, incluso, los más exorbitantes privilegios administrativos sustanciales por ejemplo, la ejecutoriedad del acto administrativo ha sido sometida a dicho control. También hay que señalar que las medidas cautelares en los procesos asimétricos, como el contencioso administrativo en su condición legislativa actual, en el que hay una violación del principio de igualdad, ya que las partes contendientes no están en una posición de igualdad, ya que la Administración Pública va a esto, siempre con prerrogativas sustanciales (por ejemplo, la capacidad de ejecución y la ejecutoriedad del acto administrativo) y formal (por ejemplo, los plazos para la presentación del proceso. La caducidad de la acción - el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, etc.) juegan un papel preponderante en su equilibrio y nivelación, siendo consecuentes con el principio de igualdad ante la ley (artículo 33 de la Constitución Política)".

Además, la Sala Constitucional se ha ocupado de desarrollar la naturaleza jurídica y el alcance de la protección cautelar, como manifestación del derecho constitucional a una justicia pronta y cumplida.

Como puede verse, en términos doctrinales y jurisprudenciales, es bien sabido que la no imposición de medidas cautelares, en un elevado número de casos, degenera en un verdadero fraude procesal, ya que la demora del fallo provoca la propia negación del derecho, por mucho que la sentencia pretenda lo contrario. De nada sirve tener un derecho si la protección del mismo no es oportuna y real. De este modo, la razón obtenida y finalmente concedida no debe ser desvirtuada por la consumación de una conducta administrativa ilícita.

La justicia, como bien sabemos, ha de ser pronta y cumplida, por lo que las medidas cautelares han encontrado arraigo en nuestro ordenamiento jurídico, como se refleja en la resolución de la citada Sala Constitucional. La siguiente cita, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, expresa de manera muy completa, este principio cardinal del derecho:

"Las medidas cautelares como instituto procesal se fundamentan en la propia Constitución Política y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, mientras que en dichos cuerpos normativos supralegales se prevé el acceso a la justicia efectiva como un derecho fundamental. En este orden de ideas, el artículo 41 señala lo siguiente al respecto: Mediante la aplicación de las leyes, toda persona debe encontrar reparación a las lesiones o daños que haya recibido en su persona, bienes o intereses morales. La justicia debe ser pronta, cumplida, sin negación y con estricto apego a las leyes. "

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere a la necesidad de que los recursos jurisdiccionales sean efectivos para reparar los derechos constitucionales y legales, tal y como establece el artículo 8: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. "

ANÁLISIS DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES:

1.- Fumus boni iuris es la apariencia de buen derecho. La gravedad de la demanda es evidente y el humo de la buena ley a favor de los peticionarios también lo es, de acuerdo con las consideraciones hechas en el apartado anterior de que las terapias de alteración genética están siendo administradas a niños sanos fuera de los ensayos clínicos sin el debido consentimiento informado de la naturaleza de investigación humana de los tratamientos de inyección genética "vacuna covid-19", y sin proporcionar información adecuada y veraz de los riesgos significativos conocidos de muerte y ADE (que es un trastorno autoinmune como respuesta a los antígenos propios de la terapia génica) y un riesgo significativo para el medio ambiente y el genoma humano. (Nota) La FDA no quiere dar a conocer los estudios de ensayos de seguridad incluso bajo orden judicial, se niega a proporcionar la información adecuada y veraz por lo que el Estado debe garantizar que los datos de seguridad y eficacia de los estudios no clínicos y clínicos están disponibles para apoyar la administración que se requiere por la ley para incluso ser capaz de dar a los bebés. Esta medida cautelar debe concederse basándose en el caso prima facie de que la administración admite que los productos se importan en virtud del artículo 117 con el fin exclusivo de la investigación humana, y el producto se encuentra en la tercera fase, utilizado en niños y bebés, mientras que todavía es de investigación. El derecho superior de los Principios de Siracusa 69 (b) y el Código de Nuremberg Artículo 1, 3, 5 están siendo violados en su cara y esto invoca la responsabilidad del Estado de cesación debida erga omnes bajo las normas internacionales perentorias. Es probable que los demandantes ganen en el fondo. El humo del buen derecho está claramente a favor de los peticionarios.

2.- Periculum in mora. La presente petición cautelar de *paralización de las vacunas pediátricas COVID-19* para poblaciones de seis meses a cinco años autorizadas por los demandados que afectan al genoma humano es un peligro tan grave para los derechos del niño y también de los padres al no dar el consentimiento informado de los productos que alteran los genes. Hay un gran peligro porque los demandados están dando un carácter obligatorio a estos productos sin el consentimiento informado de la naturaleza de la alteración de los genes

de los productos y están inyectando a niños inocentes en este momento, lo que debe ser detenido y parado inmediatamente. Todas estas cuestiones pendientes están frustrando el propósito de defender los derechos humanos. Los peticionarios sostienen que el Estado está negando a los peticionarios sus derechos en virtud de los artículos **1, 5 (b)(c), 9 (1)(2)(3), 11, 17, 18** de la ley superior de la **Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/53/144 del 8 de marzo de 1999** para la "Declaración sobre el derecho y la responsabilidad de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos".

3.- Ponderación de los intereses en juego (o bilateralidad del Periculum in mora). O elemento de ponderação do inter esse em jogo deve ser considerado, a fim de inclinar a decisão de adoção da medida cautelar que, descrita em referência e incorporada ao presente, é demonstrada que ele causaria um grave prejuízo aos direitos dos Petistas e aos direitos dos bebés saudáveis, das crianças, dos seres humanos e do meio ambiente com nenhum prejuízo para a Administração, com a suspensão na execução que se efetua.

RECLAMACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES:

Se solicita que, con carácter de urgencia, se ordene a **la demandada sin audiencia lo** siguiente

Suspender las acciones de autorización de las vacunas pediátricas COVID-19 para poblaciones de seis meses a cinco años, para dar el debido consentimiento informado y publicar en la Gaceta que las terapias basadas en genes "Productos Vacunados COVID-19" para uso en bebés se detengan inmediatamente.

Dada la evidencia debe ser detenido para todos los seres humanos o dar el consentimiento informado adecuado en virtud de las leyes de investigación biomédica y el derecho a defender los derechos humanos y también para dar efecto a la ley y las leyes internacionales

Es la opinión de los demandantes que el CONIS (Ministerio de Salud) es algo nuevo y está mal equipado para manejar los deberes éticos debidos por el Estado y está en violación del deber de proporcionar el consentimiento informado por lo tanto; Para la protección de los niños, el genoma humano y el medio ambiente, los peticionarios exigen una moratoria colocada indefinidamente en el registro y el uso de todos los productos de investigación biomédica que la FDA considera una

"terapia de genes y células", incluyendo pero no limitado al producto llamado "Vacuna COVID-19".

Dado que el Estado es responsable en virtud de las normas imperativas internacionales, el Estado tiene el deber de cesar, indemnizar, satisfacer y el deber de dar garantías razonables de no repetición. Recordamos al tribunal sus deberes y responsabilidades en virtud del derecho internacional, que se reiteran en la siguiente ley Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos de 2001

Los demandantes alegan una reclamación contra los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, incumplimiento de plazos obligatorios u omisión de trámites que puedan ser corregidos antes de la resolución definitiva del asunto.

Los demandantes reclaman daños y perjuicios que se probarán durante el proceso sin límite de cuantía

PRUEBA:

Como apoyo a lo descrito se ofrece la siguiente prueba:

1. Ver hecho #1, Seis páginas: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias-2022/1388-costa-rica-primer-pais-latinoamericano-en-contar-con-vacunas-pediatricas-para-poblacion-de-seis-meses-a-cinco-anos> El Ministerio de Salud, CCSS y CNE, CNVE autorizó a Costa Rica como primer país latinoamericano en contar con vacunas pediátricas COVID-19 para poblaciones de seis meses a cinco años, Documento DM-RM- 6934-2022.- MINISTERIO DE SALUD. San José a las diez horas del dieciséis de septiembre de dos mil dos. Y también N ° GM-11395-2022, 27 de septiembre de 2022 del documento de tres páginas de la CCSS.

2. Ver documento # XXXXXXXXXX, 8 Páginas, San José, 24 de enero de 2022 "*Las vacunas utilizadas por el país contra el covid-19 están autorizadas por la OMS y, además, cuentan con la aprobación para ser utilizadas por las Agencias Reguladoras Estrictas, como la FDA y la EMA*". También la CNVE admite que los productos son experimentales de investigación y se importan bajo las leyes de investigación biomédica.


3. Un documento de trece páginas para FDA-2022-N-0905 Lunes 27 de junio de 2022 Paquete de participación como partes interesadas relevantes de la Organización Internacional de la Sociedad Civil Interés de la Justicia y enlace de vídeo https://www.youtube.com/watch?v=BFdzNUus_CE con transcripciones y marcas de tiempo

4. Una prueba documental de catorce páginas Ver Hecho 7., caso con el Comisionado de Alimentos y Medicamentos para revocar la autorización de la FDA para Moderna, Pfizer-BioNTech Bivalente COVID- 19 Vacunas para su uso como una dosis de refuerzo, y revocar todas las demás

autorizaciones para las Terapias Génicas de ARNm mal marcadas como vacunas que no confieren inmunidad porque la orientación de la FDA de enero de 2020: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for Industry" (Seguimiento a largo plazo después de la administración de productos de terapia génica humana), afirma que el uso de estos productos experimentales afecta al ADN con un riesgo poco razonable para su uso en más de unas pocas personas a la vez", que es el docket # FDA-2022-P-2411.

5. Ver hecho #8: prueba documental de dos páginas El 13 de marzo de 2019, Moderna presentó su Informe Anual del [Formulario 10-K](#) a la Securities & Exchange Commission (SEC) (Comisión de Seguridad e Intercambio) en el que afirmaron en ([página 150](#) Enlace al documento completo aquí) que "*Actualmente, el ARNm se considera un producto de terapia génica por la FDA*". [1, 2] En esa misma presentación afirman que "*debido a que no se ha aprobado ningún producto en el que el ARNm sea el principal ingrediente activo, la vía regulatoria para su aprobación es incierta. El número y el diseño de los estudios clínicos y preclínicos necesarios para la aprobación de este tipo de medicamentos no se han establecido...* y más
6. Véase el dato 9. Prueba documental de diez páginas sobre la historia de la investigación con seres humanos y la moratoria *En la última parte del siglo XX, se convirtió en un lugar popular para los ensayos clínicos financiados por las empresas farmacéuticas multinacionales. Ante la preocupación por la ineficacia de la supervisión y los presuntos abusos en la investigación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aprobó una moratoria de todos los estudios biomédicos con seres humanos*
7. Documento de 16 páginas: Véase el hecho undécimo - pruebas documentales de la diseminación de la terapia génica y cómo afecta al medio ambiente, llamado "Determinación de la necesidad y el contenido de las evaluaciones ambientales para las terapias génicas, las vacunas vectorizadas y los productos virales o microbianos recombinantes relacionados"
8. El Dr. Michael Yeadon ex vicepresidente de la compañía farmacéutica Pfizer, dos declaraciones autenticadas en Costa Rica sobre las cuestiones de seguridad de los niños y las madres y los productos de edición de genes. Recibido muchas veces a la parte demandada e indiscutible.
9. Un documento de 16 páginas con una cantidad monumental de pruebas que demuestran que las "Vacunas" basadas en genes afectan al ADN y muchas más pruebas.
10. Pruebas documentales en PDF y enlace de vídeo con fotos de niños lesionados tras tomar la "*vacuna Pfizer COVID-19*"
11. Durante el proceso se aportarán testimonios científicos de expertos.

NOTIFICACIONES: Los demandantes recibirán una notificación por correo

 como medio subsidiario, a los *Demandados* en la

siguiente dirección cnve@misalud.go.cr, dac.consultas@misalud.go.cr o correspondencia.ministro@misalud.go.cr, coinccss@ccss.sa.cr

Proceda en consecuencia.

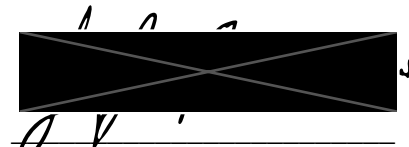
San José, a las doce horas y treinta y cuatro minutos del viernes siete del mes de octubre del año dos mil veintidós.

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es cierto y correcto según la ley

Respetuosamente,

Interest Of Justice Org. [REDACTED] y [REDACTED]

Los demandantes son competentes, están en su sano juicio y son mayores de edad y desean proceder con un traductor legal y presentar al tribunal en nombre de ellos mismos y del interés de la justicia, un grupo con intereses difusos.


Lord [REDACTED]

Todos los derechos reservados

DEI GRATIA


Lady [REDACTED]

Todos los derechos reservados

DEI GRATIA

Administrative Litigation

Administrative Contentious Court

TYPE OF PROCESS: REQUEST FOR PRECAUTIONARY MEASURE BEFORE CAUSAN

File number:

Actor: *Interest Of Justice*, [REDACTED], [REDACTED]

Defendant: *CCSS, Secretary of CNVE Roberto Tijerino, Ministerio de Salud*

Estimado Amigo Judge:


The undersigned, Interest of Justice or “IOJ” is a Private Institute, Internationally Domiciled Civil Society Organization Established in November of 2016, a group with diffuse interests based in the southern zone of San Jose, Costa Rica, [REDACTED]. IOJ’s key functions are to help the Global Community of Citizens ensure government accountability to the people. IOJ’s mission is safeguarding the interest of the international community as a whole and to give effect to the letter and intent of the supreme international law, it’s peremptory norms and customs.,

The undersigned [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Defender of *Human Rights* [REDACTED]

The undersigned [REDACTED], [REDACTED] Profession as a Defender of *Human Rights* [REDACTED] identification passport *numbe* [REDACTED], in accordance with articles 1, 2, 19 to 30, 60, 128 and concordant with the Contentious-Administrative Procedure Code, with due respect Plaintiffs request that PRECAUTIONARY MEASURE AS PRIOR ACTION be issued, to guarantee the effective result of a full contentious process and preferential processing that will be filed in due course., in order to declare the absolute nullity of administrative conduct that is the object of the process and the material actions of the public admin and The omissive conducts of the Public Administration which consists of a public servant who has acted with intent or gross negligence in the performance of their duties. Such acts is a manifest illegality, *because* the Administration has departed of Expert advisory opinions in which now show the illegality. measure involves active administrative conduct or omissions with discretionary elements, or vices in the exercise of its discretion. The misuse of power shall constitute grounds for challenging. The law shall protect, at very least, the personal rights and legitimate interests of those governed administrative acts which was also published by the administration regarding COVID-19 pediatric vaccines for populations from six months to five years, DM-RM- 6934-2022.- MINISTRY OF HEALTH. San José at ten o'clock on the sixteenth September two thousand and twenty two and also Document N ° GM-11395-2022, September 27, 2022 from the CCSS

FACTS:

First: Defendants, The Ministry of Health, CCSS and CNE, CNVE authorized Costa Rica as the first Latin American country to have COVID-19 pediatric vaccines for populations from six months to five years, DM-RM- 6934-2022.- MINISTRY OF HEALTH. San José at ten o'clock on the sixteenth September two thousand and twenty two and also Document N ° GM-11395-2022, September 27, 2022 from the CCSS and published in the national newspaper. It is reiterated that the Political Constitution and the Convention on the Rights of the Child impose on the Costa Rican State the obligation to ensure the protection of the best interests of the child, as a human right. fundamental. Consequently, in order to protect the right to life and health that assists minors, and to protect the rights of children pediatric vaccination against COVID-19 with the gene therapy investigational **products must be immediately prevented**. CCSS is incorrect in its assertion from: **GM-11395-2022, September 27, 2022 that, “In addition to constituting a legal obligation, the Caja's health personnel Costa Rican Social Security is empowered to inoculate minors *and the informed consent of the parents is not required for this purpose, in accordance with article 43 of the Children's Code and the Adolescence, which stipulates the following: “Article 43.- Vaccination.Minors must be vaccinated against diseases determined by health authorities. Supplying and applying the vaccines will be obligations of the Costa Rican Social Security Fund. For medical reasons, the exceptions to apply the vaccines will be authorized only by the corresponding health personnel. The father, the mother, the legal representatives or the person in charge will be responsible for the obligatory vaccination of the minors under their care to be carried out in a timely manner.”*** Said foundations of mandatory vaccination have been endorsed and reiterated by the Constitutional Chamber on multiple occasions, within judicial processes in which the Institution has appeared as a party; see Judgment No. 2019015643, issued at nine thirty minutes on August twenty- third, two thousand and nineteen, of file 19-010676-0007-CO, in which the Costa Rican Insurance Fund was appealed Social, the Ministry of Health, the Ministry of Public Education and the Board of Trustees Nacional de la Infancia, in an appeal for amparo through which the obligatory inoculation of minors was objected, as well as the informed consent of the parents or guardians; arguments that were not shared by the Court Constitutional Court, who declared the appeal inadmissible and resolved, in what is of interest, the following: “(...) *this Chamber does not consider that the consultants are right, in saying that establishing the compulsory nature of vaccinations is detrimental to the right to autonomy of will. Health as a means and as an end for the personal and social fulfillment of man constitutes a human and social right whose recognition is out of the question. It is one of the rights of man that emanates from his dignity as a human being. From this right arises both for the individual and the organized community, as well as for the state itself, a responsibility regarding health. International instruments and constitutional declarations of social rights include the right to health, to whose recognition must be added the imposition of the duty to care for one's own health and that of others.*” Petitioners argue that the ruling is correct when in regards to vaccines as defined in 32722

(p) however, the product covid-19 vaccine is defined by FDA as a gene or cell therapy which is still investigational research products and there is NO MOTIVATION for CCSS, CNVE or Sala 4 to compare vaccines to the COVID-19 investigational gene therapy injections because the scientific mechanism of action is very different with 2 different safety profiles, the gene therapy being extremely new and untested and admittedly investigational, which the Superior international law Siracusa Principles Article 69 b PROHIBITS the State from administering at this time without informed consent because to do so is to violate non derogable rights that the law does not allow Sala 4 to derogate from. When it comes to this issue of international law and human rights violations the national law is inferior and NOT APPLICABLE. **What Superior law does apply is Declaration of Helsinki, UNESCO Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, Siracusa Principles Article 69 (b) and Nuremberg Code Article 1, 3 and 5 because these are investigational products by nature, known to cause death as a common effect not in the fact sheet, and these investigational products are still not approved vaccines according to testimony under oath of CCSS and Ministerio de Salud in petitioners record.** These are research products and informed consent is REQUIRED. Sala 4 is not empowered to disregard facts or law and the facts are clear its investigational and the law is clear investigational products cannot be mandatory or given voluntarily in the absence of true informed consent of the known significant risks of death, DNA affected, long term delayed adverse effects such as cancers and auto immune like disorders. Vaccines are not the same as these types of gene therapies which are still “investigational” and not registered according to CCSS secretary confessions in our record. In law similar is never the same. Siracusa Principles Article 69 (b): No state, including those that are not parties to the Covenant, may suspend or violate, even in times of public emergency: (b) freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and **from medical or scientific experimentation**; Customary international law prohibits in all circumstances the denial of such fundamental rights. Sala 4 has a duty to take the CNVE secretary and Minister of Health’s January 24, 2022 confession that the products are experimental at face value because as noted by the Chamber, **testimony of the executive is to be taken under oath as true.** See confessions the product is exclusively imported for human research and investigational, still in 3rd phase which is the experimental phase prior to safety and approval 

Second: Costa Rica government and health authorities rely on health data, guidance’s, laws and regulations about the pediatric vaccines from the FDA (Food and Drug Administration in the United States of America) and other bodies outside of Costa Rica which authorize and or distribute biological pharmaceutical drugs such as COVID-19 Gene therapies- mRNA technology and vaccines. See documentary evidence #2 *“The vaccines used by the country against covid-19 are authorized by the WHO and, in addition, have approval to be used by the Strict Regulatory Agencies, such as the FDA and EMA.”*

Third: The Costa Rican health authorities testified in Petitioners record that they rely on health data, guidance’s, laws and regulations about the pediatric vaccines from the FDA-(Food and Drug

Administration in the United States of America), United Kingdom and other bodies outside of Costa Rica which authorize and or distribute biological pharmaceutical drugs such as Gene therapies, mRNA technology and vaccines. Petitioners received testimony from Defendants January 24, 2022 expressing that the products are imported under the biomedical research laws see documentary evidence. The evidence that plaintiffs rely upon are also that of the facts and data in which the defendants rely upon from the FDA which is already settled on public record. There aren't any disputes at this time. See documentary evidence #2 *"The vaccines used by the country against covid-19 are authorized by the WHO and, in addition, have approval to be used by the Strict Regulatory Agencies, such as the FDA and EMA"*

Fourth: Plaintiffs legal relationship with Costa Rican health authorities and the FDA are all of the same subject matter regarding human rights of Children and also adults but in this case, the urgency is Children. Plaintiffs have written every government official possible since December of 2020 in Costa Rica in regards to legalities and also dangers of the pediatric vaccines and are stuck in administrative processes with the health authorities which are inefficient slow as a mule. The administration will not answer direct questions. Plaintiff's have testimony from the Constitutional Chamber about the previous administration who testified "will only answer us generally on purpose". The presumptions in the administrative record have been settled as fact and default by acquiescence in which the challenged acts are absolutely null and reckless.

Fifth: Plaintiffs have pending matters before multiple administrations including of which the Ministry of Health is still pending a response from the competent authorities such as the CNVE, in relation to petitioners' complaints. The processes are extremely slow and inactive and inefficient in such an urgency which is another reason why there is a danger in the delay.

Sixth: Plaintiffs have interests in the matter and are Stakeholders in the FDA/CBERPAC/VBERPAC, Bivalent COVID-19 products approval process and are in regards to the same pediatric vaccines in which Costa Rica has authorized and imported for the use in humans. Some of the information between FDA and plaintiffs are about the lack of a compelling public interest test, also necessity, legality, reasonableness and proportionality. There is evidence in the record of more risk than to benefit ratio which is also settled as fact in the record and not in dispute. See Documentary evidence # 3 Interest of Justice Comment and Stakeholder info to FDA as relevant stakeholders

Seventh: Under the US law, Code of Federal Regulations CFR 10.30, Plaintiffs have opened a case with the Commissioner of Food and Drug to revoke FDA Authorization for Moderna, Pfizer-BioNTech Bivalent COVID-19 Vaccines for Use as a Booster Dose, and revoke all other authorization for mRNA Gene Therapies misbranded as vaccines which do not confer immunity because FDA January 2020 guidance: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for Industry," states the use of these experimental products affects DNA with an unreasonable risk to use in more than a few people at a time", which is docket

FDA-2022-P-2411. Plaintiffs need due process, considering the Costa Rica Healthy Authorities rely on data from the FDA. This data can change any moment in time after these debates are settled. The FDA says they rely on the totality of evidence to authorize these Gene altering products except they did not take into consideration Petitioners evidence and are still in debate. Hence the need for due process. See documentary evidence #4

Eighth: The FDA Considers mRNA a gene therapy, which Petitioners gave them extensive knowledge from their own data base and FDA says it creates an unreasonable risk in more than a few people. On March 13, 2019, Moderna submitted their [Form 10-K](#) Annual Report to the Securities & Exchange Commission (SEC) (Security and exchange commission) in which they claimed on [page 150](#) that “*Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA* “. [1, 2] In that same filing they state “*because no product in which mRNA is the primary active ingredient has been approved, the regulatory pathway for approval is uncertain. The number and design of the clinical and preclinical studies required for the approval of these types of medicines have not been established...*” Fast forward to early 2020 and suddenly this mRNA product is no longer a “*type of medicine*” or drug, but is referred to as a “*vaccine*”, which means they can slip into an established regulatory pathway of a “*biologic*“. According to the [FDA](#) vaccines are meant to “*prevent infectious diseases*”. The FDA’s **Center for Biologics Evaluation and Research** (CBER) regulates vaccine products – a separate department within the FDA to medicines/drugs, with their own assessment and licensing process ([BLA](#)). Moderna goes from a company that has “*incurred significant losses since our inception*”, having never brought a product to market, to [\\$12 billion](#) in profits in 2021 on the back of an mRNA product they called a “*vaccine*”. ‘*We probably would have had a 95% refusal rate for these shots two years ago, but the pandemic and marketing of the injections as ‘vaccines’ has made them popular with the public, said Stefan Oelrich, president of Bayer’s Pharmaceuticals Division, speaks at the 2021 Global Health Summit. See documentary evidence # 5*

Ninth: Reviving Human Research in Costa Rica between 2010 and 2014, the Costa Rican Government had a long battle to ensure the experimentation on humans and biomedical research was upheld with a moratorium. It is critical to note that FDA Says that their current thinking in the “Gene therapy products” is that they do indeed affect the human genome therefore under Costa Rica health law, they are regulated under article Article. 5 and 10 of the Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights, which the Constitutional court says is “*the heritage to humanity*” Plaintiffs believe it should be held back in place due to the genetic experimental nature of the products being questioned. Because the State is omitting what is required for informed consent and failing to provide adequate and truthful information that the product effects the human genome causing a sequela of significant delayed adverse effects. See documentary evidence “*Costa Rica is a small developing nation in Central America with a well-regarded universal health care system and a strong human rights tradition. In the latter part of the twentieth century, it became a popular site for clinical trials funded by multinational pharmaceutical companies. In light of concerns about ineffective oversight and alleged research abuses, the Constitutional*

*Chamber of the Supreme Court passed a moratorium on all biomedical studies involving humans. This moratorium was in place between 2010 and 2014, when the Legislative Assembly passed a new national law to protect participants' rights and welfare. This case study reviews the history of human research protections in Costa Rica and provides recommendations for how Costa Rica can move forward responsibly as a leader in human research for the region. **KEYWORDS** human subjects research, Costa Rica, research moratorium, human research ethics, biomedical research* Householder, M., et al., "Reviving Human Research in Costa Rica," *Ethics & Human Research* 41, no. 1 (2019): 32-40. DOI: 10.1002/eahr.500004" **See Documentary evidence #6**

Tenth: That according to the Political Constitution in its articles 21 and 50, the right to life and health of the people is a fundamental right, as well as the welfare of the population, which become legal assets of public interest and before Therefore, the State has the inexorable obligation to ensure their protection. Derived from this duty of protection, there is a need to adopt and generate immediate safeguard measures when such legal assets are threatened or endangered, following the constitutional mandate stipulated in numeral 140 subsections 6) and 8) of the Basic Text.

That it is an essential function of the State to ensure the health of the population, corresponding to the Executive Power through the Ministry of Health, the definition of the national health policy, the training, planning and coordination of all public and private activities related to health , as well as the execution of those activities that correspond to it according to the law, due to the functions entrusted to the Ministry of Health, public health surveillance must be carried out and the health situation of the population must be evaluated when they are at risk

That according to articles 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341 of the General Health Law, Law No. 5395 of October 30, 1973 and ordinal 2 subsection b) and 57 of the Organic Law of the Ministry of Health, Law NO 5412 of November 08, 1973, health regulations are of public order and the treaties are excepted as highest law in the hierarchy. Given this, the Ministry of Health as the competent authority may order and take special measures to avoid risk or damage to people's health, or that these are spread or aggravated, as well as to inhibit the continuation or recurrence of the violation of individuals **only as long as they are in compliance with the Superior laws that govern these biomedical research gene therapy products called covid-19 vaccines**

Eleventh: Interest of Justice, an international Organization and Petitioners whom are a group with diffuse interests, injured by this legal situation invoke the Courts duty and responsibility under the superior law Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001to prevent the violation of peoples non derogable rights to refuse an experiment in article 69(b) of the Siracusa Principles. In particular Petitioners would like to point out the existence of a breach of an international obligation to NOT violate non derogable rights to refuse experimentation with no informed consent. Because the State is responsible under International peremptory norms, the State has a duty of Cessation, compensation, satisfaction and the duty of reasonable assurances of non

repetition. We kindly remind the court of their duties and responsibilities under international law in which are reiterated in the following law Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001. See the following applicable articles in which are invoked:

Article 12

Existence of a breach of an international obligation. There is a breach of an international obligation by a State when an act of that State is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character.

Article 26

Compliance with peremptory norms

Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general international law.

Article 30 Cessation and non-repetition

The State responsible for the internationally wrongful act is under an obligation:

- (a) to cease that act, if it is continuing;
- (b) to offer appropriate assurances and guarantees of non-repetition, if circumstances so require.

Article 31 Reparation

1. The responsible State is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.
2. Injury includes any damage, whether material or moral, caused by the internationally wrongful act of a State.

Article 32 Irrelevance of internal law

The responsible State may not rely on the provisions of its internal law as justification for failure to comply with its obligations under this part.

REPARATION FOR INJURY

Article 34 Forms of reparation

Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.

Article 35 Restitution

A State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to make restitution, that is, to re-establish the situation which existed before the wrongful act was committed, provided and to the extent that restitution:

- (a) is not materially impossible;

(b) does not involve a burden out of all proportion to the benefit deriving from restitution instead of compensation.

Article 36 Compensation

1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to compensate for the damage caused thereby, insofar as such damage is not made good by restitution.
2. The compensation shall cover any financially assessable damage including loss of profits insofar as it is established.

Article 37 Satisfaction

1. The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act insofar as it cannot be made good by restitution or compensation.
2. Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.
3. Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.

LEGAL CONSIDERATIONS ON PRECAUTIONARY MEASURES:

The request for precautionary measures is based on articles 41 and 49 of the Political Constitution, and on articles 19, 20, 21, 22, 24, 25 of the Code of Administrative Litigation.

The fundamental right to precautionary justice has been developed in the Costa Rican constitutional jurisprudence. It is based on article 41 of the Political Constitution, as stated in judgment No. 2005-6224, at fifteen hours and sixteen minutes, on May 25th, two thousand and five, by means of which the Constitutional Chamber arranged:

"There cannot be a prompt and fulfilled or effective judicial protection, if the jurisdictional body cannot exercise a flexible and expeditious power of precaution (" ...) it is necessary to point out that the derivative constituent, when reforming article 49 of the Constitution Politics, through Law No. 3124, of June 25, one thousand nine hundred and sixty-three, conceived a control of the legality of the universal and plenary administrative function without external control pockets, so that, even, the most exorbitant substantial administrative privileges for example, the enforceability of the administrative act has been subject to such control. It should also be noted that precautionary measures in asymmetric processes, such as administrative litigation in its current legislative condition, in which there is a violation of the principle of equality because the disputing parties are not in a position of equality, since the Public Administration goes to this, provided with substantial prerogatives (eg enforceability and enforceability of the administrative act) and formal (eg deadlines for filing the process. Expiration of the action - the mandatory exhaustion of the administrative procedure, etc.) They play a leading role in their balance and leveling, being consistent with the principle of equality before the law (Article 33 of the Political Constitution) "

In addition, the Constitutional Chamber has dealt with developing the legal nature and scope of precautionary protection, as a manifestation of the constitutional right to prompt and fulfilled justice.

As can be seen, in doctrinal and jurisprudential terms, it is well known that the non-imposition of precautionary measures, in a high number of cases, degenerates into a true procedural fraud, since the delay of the ruling causes the very denial of the law, no matter how much the sentence seeks otherwise. It is useless to have a right if the protection of this right is not timely and real. In this way, the reason obtained and finally granted should not be undermined by the consummation of unlawful administrative conduct.

Justice, as we well know, has to be prompt and complied with, therefore, the precautionary measures have found roots in our legal system, as it is reflected in the resolution of the aforementioned Constitutional Chamber. The following quote, from the Contentious Administrative and Civil Court of Finance, expresses in a very complete way, this cardinal principle of law:

"The precautionary measures as a procedural institute are based on the Political Constitution itself and the International Treaties signed by our country, while in said supra-legal normative bodies, access to effective justice is provided as a fundamental right. In this order of ideas, article 41 states the following in this regard: By applying the laws, everyone must find reparation for the injuries or damages that they have received in their person, property or moral interests. Justice must be done promptly, complied with, without denial and in strict compliance with the laws. "

For its part, the Universal Declaration of Human Rights refers to the need for jurisdictional remedies to be effective in order to repair constitutional and legal rights as provided in article 8: "Everyone has the right to a remedy effective before the competent national courts, which protects them against acts that violate their fundamental rights recognized by the constitution or by law. "

ANALYSIS OF THE PROCEDURAL BUDGETS:

1.- Fumus boni iuris is the appearance of good law. The seriousness of the claim is evident and the smoke of good law in petitioners favor is also evident, in accordance with the considerations made in the previous section that the gene altering therapies are being administered to healthy children outside clinical trials without proper informed consent of the investigational human research nature of the genetic injection "covid-19 vaccine" treatments, and without providing adequate and truthful information of the known significant risks of death and ADE (which is an autoimmune like disorders in response to self antigens from gene therapy) and a significant risk to the environment and human genome. (Note) The FDA won't release the safety trial studies even under court order, refuses to provide the adequate and truthful information so the State must ensure that safety and efficacy data from non-clinical and clinical studies are available to support the administration which is required by law to even be able to give to babies. This precautionary measure should be granted based on the prima facie case that the administration concedes the

products are imported under Article 117 for the exclusive purpose of human research, and the product is in 3rd phase, used in children and babies while still investigational. Superior law of Siracusa Principles 69 (b) and Nuremberg Code Article 1, 3, 5 are being violated on their face and this invokes State responsibility of cessation owed erga omnes under international peremptory norms. Petitioners are likely to win on the merits. The smoke of good law is clearly in petitioners favor.

2.- Periculum in mora. The present precautionary request of *halting the* COVID-19 pediatric vaccines for populations from six months to five years authorized by defendants which affect the human genome is such a grave danger to the rights of the child and also the parents by not giving informed consent of the gene altering products. There is great danger because the defendants are giving an obligatory nature to these products without informed consent of the gene altering nature

of the products and are injecting innocent children right now which needs to be stopped and halted immediately. All of these pending issues are frustrating the purpose of defending human rights. Petitioners contend the State is denying Petitioners their rights under superior law article **1, 5 (b)(c), 9 (1)(2)(3), 11, 17, 18 United Nations General Assembly A/RES/53/144 March 8, 1999** report for “Declaration on the right and responsibility of individuals, groups of organs of society to promote and protect universally recognized human rights and fundamental freedoms.

3.- Weighting of the interests at stake (or bilaterality of the Periculum in mora). The element of weighting of interest at stake must be considered, in order to incline the decision to adopt the precautionary measure that is described above in reference and incorporated herein, it is shown that it would cause serious damage to the rights of Petitioners and the rights of healthy babies, children, humans and the environment with no damage to the Administration, with the suspension in the execution that is carried out.

CLAIM OF PRECAUTIONARY MEASURES:

It is requested that, urgently, **the defendant** be ordered **without hearing the** following:

Suspend the actions of the authorization of the COVID-19 pediatric vaccines for populations from six months to five years, to give proper informed consent and publish in the Gazette that the gene based therapies “COVID-19 Vaccine Products” for use in babies be halted immediately.

Given the evidence it should be halted for all humans or give proper informed consent under biomedical research laws and the right to defend human rights and also to give effect to the law and international laws

It is the Plaintiffs opinion that CONIS (Ministerio De Salud) is somewhat new and ill equipped to handle the ethical duties owed by the State and is in breach of duty to provide informed consent therefore; For the protection of the children, human genome and the environment, Petitioners

demand a moratorium placed indefinitely on the registration and use of all of the investigational biomedical research products that FDA considers a “gene and cell therapies” including but not limited to the product called ”COVID-19 Vaccine”.

Because the State is responsible under International peremptory norms, the State has a duty of cessation, compensation, satisfaction and the duty of reasonable assurances of non-repetition. We kindly remind the court of their duties and responsibilities under international law in which are reiterated in the following law Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Plaintiffs claim a complaint against processing defects and, in special, those that suppose paralysis, infringement of mandatory deadlines or omission of procedures that can be corrected before the final resolution of the matter.

Plaintiffs claim damages which will be proven during process without limit of sum

PROOF:

The following test is provided as support for the above described:

1. See fact #1, Six pages: <https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/prensa/52-noticias-2022/1388-costa-rica-primer-pais-latinoamericano-en-contar-con-vacunas-pediatricas-para-poblacion-de-seis-meses-a-cinco-anos> The Ministry of Health, CCSS and CNE, CNVE authorized Costa Rica as the first Latin American country to have COVID-19 pediatric vaccines for populations from six months to five years, Document DM-RM- 6934-2022.- MINISTRY OF HEALTH. San José at ten o'clock on the sixteenth September two thousand and twenty two. And also N ° GM-11395-2022, September 27, 2022 from the CCSS three page document

2. See document # [REDACTED], 8 Pages, San Jose, January 24, 2022 *“The vaccines used by the country against covid-19 are authorized by the WHO and, in addition, have approval to be used by the Strict Regulatory Agencies, such as the FDA and EMA.”* Also CNVE admits the products are experimental investigational and imported under Biomedical research laws.


3. A thirteen page Document for FDA-2022-N-0905 Monday June 27, 2022 Participation package as relevant interested stakeholders from International Civil Society Organization Interest Of Justice and Video link https://www.youtube.com/watch?v=BFdzNUus_CE with transcripts and timestamps

4. A fourteen page Documentary evidence See Fact 7., case with the Commissioner of Food and Drug to revoke FDA Authorization for Moderna, Pfizer-BioNTech Bivalent COVID- 19 Vaccines for Use as a Booster Dose, and revoke all other authorization for mRNA Gene Therapies misbranded as vaccines which do not confer immunity because FDA January 2020 guidance: "Long Term Follow-Up After Administration of Human Gene Therapy Products Guidance for

Industry," states the use of these experimental products affects DNA with an unreasonable risk to use in more than a few people at a time”, which is docket # FDA-2022-P-2411.

5. See fact #8: two page documentary evidence On March 13, 2019, Moderna submitted their [Form 10-K Annual Report](#) to the Securities & Exchange Commission (SEC) (Security and exchange commission) in which they claimed on ([page 150 Link to full document here](#)) that “*Currently, mRNA is considered a gene therapy product by the FDA* “. [1, 2]In that same filing they state “*because no product in which mRNA is the primary active ingredient has been approved, the regulatory pathway for approval is uncertain. The number and design of the clinical and preclinical studies required for the approval of these types of medicines have not been established...* and more
6. See fact 9. Ten page documentary evidence of the history of human research and moratorium *In the latter part of the twentieth century, it became a popular site for clinical trials funded by multinational pharmaceutical companies. In light of concerns about ineffective oversight and alleged research abuses, the Constitutional Chamber of the Supreme Court passed a moratorium on all biomedical studies involving hu- mans*
7. 16 page document: See fact eleventh- documentary evidence of Gene therapy shedding and how it affects the environment called “Determining the Need for and Content of Environmental Assessments for Gene Therapies, Vectored Vaccines, and Related Recombinant Viral or Microbial Products”
8. Dr. Michael Yeadon former vice president of Pfizer Pharmaceutical company, two authenticated declarations authenticated in Costa Rica on the safety issues of Children and Mothers and People and Gene editing products. Received many times to defendant and undisputed.
9. A 16 page document of a monumental amount of evidence proving the Gene based “Vaccines” affect the DNA and much more evidence.
10. PDF Documentary evidence and Video link with photos of injured children after taking the “Pfizer COVID-19 vaccine”
11. Expert scientific testimony will be provided during the process.

NOTIFICATIONS: Plaintiffs will receive notification sat the

mail  or, as a subsidiary means, and to the *Respondents* at the following address cnve@misalud.go.cr, dac.consultas@misalud.go.cr o correspondencia.ministro@misalud.go.cr, coincss@ccss.sa.cr

Proceed accordingly.

San Jose, at twelve hours and thirty four minutes on Friday the seventh day of the month of October of the year two thousand and twenty two.

I affirm under the penalty of perjury the foregoing is true and correct according to law

Respectfully,

Interest Of Justice Org., Lord [REDACTED] and Lady [REDACTED]

Plaintiffs are competent, of sound mind and over the age of consent and wish to proceed with a legal translator and present to the court of behalf of themselves and Interest of Justice, a group with diffuse interests.

A
o
e
[REDACTED]
J
V
[REDACTED]
Lord [REDACTED]

All Rights Reserved
DEI GRATIA

[REDACTED]
[REDACTED]
Lady [REDACTED]

All Rights Reserved
DEI GRATIA